

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA

Magistrada Sustanciadora: Marcela Adriana Castillo Silva

Ref.: Declarativo 2019-00032 (442-01)

Pasto, doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 806 de 2020, se profiere por escrito la decisión que resuelve el recurso de apelación propuesto por los demandantes, los demandados, el curador *ad litem* de los herederos indeterminados y la llamada en garantía contra la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, el 19 de agosto de 2020, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual de Bernardo Segundo Puerres López y otros en contra de Wilmer Narváez Cundar y otros .

I. ANTECEDENTES

1. **Demanda.** Bernardo Segundo Puerres López, María Nohemi Puerres, Bertha Elizabeth Puerres Guerrero, Ana Patricia Puerres Guerrero y David Andrés Ruano Puerres, a través de mandatario judicial, solicitaron se declare que los demandados son civilmente responsables de la muerte de la señora Rosa Fanny Puerres Guerrero, con ocasión de un accidente de tránsito acaecido el 13 de diciembre de 2011, por lo que reclaman el pago a su favor de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos a raíz del suceso.

Como sustento de sus pretensiones indicaron los demandantes que el 13 de diciembre de 2011, en la carretera que conduce de Ipiales a Pasto se movilizaban Fidencio Narváez y Rosa Puerres Guerrero, en un vehículo con placas AUZ 066, conducido por el primero, que colisionó contra un bus de servicio público de la empresa Continental, lo que causó el deceso de ambos ocupantes del automotor particular.

Aducen los demandantes que el fallecimiento de la señora Rosa Fanny Puerres Guerrero ocurrió por la conducta negligente del conductor del vehículo en que se transportaba aquella, por exceso de velocidad e invasión de carril contrario.

2. **Contestación.** Los señores Diana Alexandra Narváez Cundar, Wilmer Andrés Narváez Cundar y Brayan Julian Narváez Cundar, como herederos del señor Fidencio Narváez propusieron como excepciones de mérito la “*fuerza mayor o caso fortuito*” y “*hecho o negligencia de un tercero*”, sustentadas en que el siniestro se derivó de un hecho irresistible, pues el vehículo se descontroló al pasar por un cauce de agua apozado en la carretera debido al desbordamiento de una alcantarilla.

El curador *ad litem* de los herederos indeterminados del señor Fidencio Narváez señaló que se atenía a lo probado dentro del expediente.

La llamada en garantía Allianz Seguros S.A., propuso diferentes excepciones perentorias como “*prescripción*”, “*inexistencia de la obligación de indemnizar – caso fortuito – fuerza mayor*”, “*carga de la prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del conductor del vehículo de placas AUZ066*”, y “*disponibilidad de valor asegurado*”.

Juan David Narváez Rosero, como heredero del señor Fidencio Narváez y llamado en garantía, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como medio de defensa “*fuerza mayor o caso fortuito*”, reiterando que la responsabilidad del accidente no era atribuible al propietario del vehículo particular, porque el mismo se debió al deficiente mantenimiento de la carretera, en la cual se rebosó una alcantarilla, causante de que el conductor del carro perdiera el control al atravesar una corriente de agua allí existente.

3. **Sentencia.** Culminado el trámite legal, en sentencia de 19 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que se encontraban acreditados los elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del extremo demandado, condenándolos al pago de lucro cesante consolidado, perjuicios morales y daño a la vida en relación, en un 70% de las montos impuestos, rebaja que fundó en el hecho externo coadyuvante al acaecimiento del accidente.

De igual forma, consideró fundados los llamamientos en garantía realizados a Allianz Seguros S.A. y Juan David Narváez Rosero, a quienes condenó a reembolsar en lo pertinente los pagos que realicen los demandados.

Mediante proveído de 20 de agosto de la misma anualidad la jueza de primer grado corrigió el monto determinado como lucro cesante y el orden de las disposiciones contenidas en el acápite resolutivo de la sentencia.

4. **Apelación.** La parte demandante apeló la decisión de primer grado, por considerar errónea la reducción en un 30% de la condena impuesta, pues quedó demostrada la negligencia del conductor del vehículo, sin que otra persona contribuyera en la causación del hecho dañoso, pues que la carretera se encontraba mojada no posibilitaba reducir los montos del perjuicio al no configurarse la concurrencia de culpas.

El curador *ad litem* de los herederos indeterminados del señor Fidencio Narváez señaló en la sustentación de su alzada la presunta valoración inadecuada de los medios de prueba, dado que estos no evidenciaron la impericia del conductor del auto; tampoco se tuvo en cuenta la responsabilidad del vehículo de transporte público contra el cual colisionaron.

La mandataria de Allianz Seguros S.A. apeló el fallo de primera instancia, basada en que: (i) de los medios probatorios obrantes en el expediente se encuentra demostrada la fuerza mayor o caso fortuito, pues la causa del accidente fue el taponamiento de una alcantarilla que conllevó el desbordamiento de una fuente hídrica en la carretera que impidió la adherencia de las llantas del vehículo e hizo imposible controlarlo, y (ii) la excesiva tasación de los perjuicios morales a favor de los demandantes.

El apoderado judicial de los demandados, apeló el fallo argumentando que: (i) hubo una indebida valoración probatoria pues el dictamen pericial aportado y las declaraciones recaudadas al expediente mostraron que la presencia de un caudal de agua y barro en la vía fueron determinantes en el accidente, (ii) no se demostró un actuar negligente del conductor del vehículo, (iii) se debió tomar como base para la condena en perjuicios materiales, que la señora Puerres Guerrero devengaba exclusivamente un salario mínimo pues no se trajo prueba de sus ingresos y (iv) no se acreditó por la parte demandante la existencia de un daño a la vida en relación susceptible de ser indemnizado.

II. CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

Corresponde a esta Sala determinar si en el caso estudiado los elementos probatorios allegados al expediente configuraron los presupuestos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas, con el fin de establecer si el daño sufrido por los demandantes es atribuible Fidencio Narváez (*q.e.p.d.*), conductor del vehículo particular de placas AUZ 066, o, si medió una causa extraña que rompió el nexo causal entre el hecho y el daño. Por ende, se establecerá si la parte llamada como pasiva debe responder pecuniariamente por los perjuicios causados.

En caso afirmativo, deberá abordarse tanto la reducción de la condena en un 30% establecida dentro de la sentencia de primera instancia, como la cuantía en general de los perjuicios materiales e inmateriales determinados dentro del proveído recurrido.

Tesis de la Corporación

Considera esta Corporación que los elementos probatorios recaudados en el proceso permiten estructurar los elementos de la responsabilidad civil que fundamentan el reclamo de indemnización, sin que se haya demostrado la configuración de un elemento extraño que sirva al efecto de eximir del pago de la condena respectiva.

Así las cosas, se considera que no hubo rompimiento del nexo causal y por ende no hay lugar a la reducción de la condena impuesta.

De otra parte, frente a los perjuicios reconocidos en la sentencia apelada, se confirmarán los relativos al lucro cesante y daño moral por estar acordes con el ordenamiento jurídico vigente y los medios de convicción obrantes en el expediente. Sin embargo, se restará la condena por *daño a la vida en relación*, al no encontrarse demostrados sus elementos estructurantes.

Estudio del Caso

1. Para que nazca a la vida jurídica la obligación resarcitoria emanada de la responsabilidad extracontractual derivada de actividades peligrosas, se exige la demostración de tres elementos concurrentes, a saber: **(i)** La actividad peligrosa **(ii)** El daño, y **(iii)** La relación de causalidad entre aquellos.

En el caso estudiado, se persigue el pago de perjuicios patrimoniales, morales y por daño a la vida de relación, generados por el fallecimiento de la señora Rosa Fanny Puerres Guerrero, en el accidente de tránsito ocurrido el 13 de diciembre de 2011, mientras se movilizaba en el vehículo de placas AUZ 066 conducido por el señor Fidencio Narváez, en la vía que de Ipiales conduce a Pasto.

Para tal efecto, la sentencia apelada estimó acreditados los tres elementos estructurantes de la responsabilidad civil extracontractual, al hallar probado que (i) el accidente ocurrió en ejercicio de una actividad peligrosa por parte del señor Fidencio Narváez, quien manejaba un vehículo automotor, (ii) los perjuicios causados a los familiares de la occisa, por su fallecimiento y (ii) la relación de causalidad entre estos dos supuestos.

Los recurrentes de la parte llamada a responder por la indemnización de los perjuicios, en lo fundamental refutaron la condena impuesta, alegando la existencia de una causal eximente de responsabilidad en el accidente, cual es la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, derivadas de la aparición intempestiva de un cauce de agua en la carretera, dado el desbordamiento de una alcantarilla, que incidió en la pérdida de control de vehículo.

Al respecto, considera el Tribunal que dentro de los asuntos derivados del ejercicio de actividades peligrosas no se hace necesario demostrar el elemento de culpa. Así lo ha venido sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que insistentemente ha señalado:

“en lo atinente a la responsabilidad por el daño causado por las cosas inanimadas, dentro de la cual se ha entendido la conducción de vehículos automotores, ha precisado la Corte, en numerosos y repetidos fallos, que la disposición aplicable en tales casos es el artículo 2356 del CC, el que consagra una presunción de culpabilidad, por lo que le basta a la víctima demostrar el hecho dañoso como consecuencia necesaria de la actividad peligrosa

desarrollada por el demandado, encontrándose, por tanto, eximida de la carga probatoria en cuanto a la culpa”¹.

Lo anterior es importante pues el apoderado judicial de la parte demandada enfatiza su alegato señalando la errada valoración probatoria realizada por la jueza de primer grado, fincado en las declaraciones que afirman la mesura y responsabilidad del conductor del vehículo encartado, que como conocedor de la carretera que conduce de Pasto a Ipiales lo hacía dentro de los límites de velocidad permitidos.

En este sentido, en un reciente pronunciamiento la Sala de Casación Civil de la Corte ha reiterado que:

“La responsabilidad en accidente de tránsito, entre otras actividades peligrosas, si bien se ha expresado, se inscribe en un régimen de “presunción de culpa” o “culpa presunta”, realmente se enmarca en un sistema objetivo, porque en ninguna de tales hipótesis el agente se exime probando diligencia o cuidado, sino cuando demuestra causa extraña; como en otras ocasiones también lo ha sostenido la Corte, en el sentido de imponer a quien ha causado el daño el deber de indemnizar, todo, en consonancia con la doctrina moderna, y atendiendo a ciertos criterios del riesgo involucrado. (...) La inoperancia del juicio de negligencia, en cuanto la adopción de medidas de precaución razonablemente exigibles no basta para evitar daños frecuentes e intensos. Así, un riesgo considerado anormal es insuficiente para responder desde la perspectiva de la culpa, en tanto, no funciona como indicador de imputación, precisamente, al existir casos en los cuales el comportamiento diligente no evita por completo la eventual producción de daños”².

Así las cosas, en el presente asunto no corresponde estudiar la prudencia o pericia del conductor del vehículo, pues nuestro ordenamiento jurídico solo admite como eximente de responsabilidad extracontractual derivada de actividades peligrosas - tales como la conducción de automotores-, la causa extraña que rompe el nexo causal entre el hecho y el daño.

Para ello, tanto la parte demandada como los llamados en garantía alegaron en la debida oportunidad procesal la configuración de una fuerza mayor o caso fortuito,

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de mayo de 1989. M.P. Eduardo García Sarmiento.

² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC 2111-2021 de 2 de junio de 2021. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

derivado de la corriente hídrica que apareció en la carretera, convirtiéndose en la causa del siniestro que derivó en el fallecimiento de los ocupantes del vehículo de placas AUZ 066, uno de los cuales era la señora Puerres Guerrero.

Al respecto, el artículo 64 del Código Civil define la causal alegada como *“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”*.

En este sentido la jurisprudencia³ ha establecido tres elementos a tener en cuenta para la configuración del caso fortuito, como son: (i) el carácter externo, entendido como una causa ajena a la voluntad del agente o al desarrollo mismo de la actividad cuestionada, (ii) la imprevisibilidad, como aquel suceso que no sea viable contemplar de forma anticipada, que también ostenta diferentes criterios como son *“1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo”*⁴, y (iii) la irresistibilidad, como aquella circunstancia que el agente no pueda evitar su acontecimiento ni sobrepasar sus consecuencias.

Bajo este entendido, se alega la indebida valoración del dictamen pericial rendido por el Ingeniero Físico Cesar Yamid Rendón Hinestroza, en el que concluyó, con base en el video aportado por ambos extremos procesales y las fotografías del lugar de los hechos que *“la presencia del cauce de agua en la vía fue determinante para que la camioneta de color negro perdiera la fricción, su estabilidad y colisionara con el vehículo que traía la cámara”*⁵.

Además, en el informe de accidente de tránsito respectivo se indicó: *“se deja constancia que la alcantarilla tomada como punto de referencia se encuentra desviando una gran parte de su cauce sobre la vía”*⁶, situación reiterada dentro de la declaración del agente de policía Jonnatan Milton Córdoba David quien anotó que cuando acudió a atender el accidente la vía se encontraba húmeda pues que la alcantarilla en la vía estaba rebozando agua.

No obstante, en el expediente se cuenta con un registro audiovisual del vehículo de

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC 4427-2020 de 23 de noviembre de 2020. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 23 de junio de 2000, Expediente No. 5475. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

⁵ Folios 113 a 127, Archivo 06CuadernoPrincipal2.

⁶ Folios 31 a 33, Archivo 02CuadernoPrincipal1.

servicio público adscrito a Continental S.A. contra el que colisionó el automóvil conducido por el señor Fidencio Narváez; elemento probatorio de preponderante importancia, en el que se registran los instantes previos al accidente y las circunstancias específicas en que ocurrió el mismo. Así, el video evidencia que segundos antes de la colisión del automóvil de placas AUZ 066, por esa misma vía, en su mismo sentido, pasaron un total de seis carros, todos los cuales por evidentes razones, también tuvieron que atravesar el pozo de agua al que se hizo referencia, sin que ocurriera nada anómalo.

Entonces, atendiendo los parámetros jurisprudenciales ya enunciados, respecto del presupuesto de la irresistibilidad del evento en cuestión, no cabe admitir a presencia de una corriente hídrica derivada del taponamiento de una alcantarilla en la vía, como causal eximente de la responsabilidad, porque lo cierto es que esta circunstancia no hacía que fuera imposible evitar la ocurrencia de un accidente como el que sustenta la presente acción, tal como lo muestra el registro filmográfico en el que se observa claramente que otros vehículos que pasaron por la carretera en el mismo sentido segundo antes, y por consiguiente se encontraron con obstáculo idéntico, pudieron sobrellevar la situación sin ningún percance, lo que impide la prosperidad del medio defensivo expuesto por los demandados y la aseguradora llamada en garantía.

Por lo anterior, es dable concluir que dentro del caso en concreto no se encuentra acreditado el elemento extraño que permita exonerar la responsabilidad de la parte demandada.

En este marco, es admisible el reproche del demandante a la reducción en un 30% de la condena impuesta por el juzgado de primer grado, aduciendo la injerencia de la carretera húmeda en la causación del hecho antijurídico, pues efectivamente el caso estudiado no nos encontramos ante una concurrencia de culpas, ni conforme a lo expuesto precedentemente se estima que la responsabilidad del siniestro se derive de fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima, recayendo la obligación de forma privativa al señor Fidencio Narváez, por lo que no se encuentra fundamento jurídico alguno para que la condena impuesta se circunscriba al 70% de los montos establecidos.

Aceptar, para este caso en particular la tesis expuesta en la sentencia de primer grado, conlleva consentir que la ruptura del nexo causal fue parcial, lo que no resultó probado.

Por lo anterior, se procederá a modificar la sentencia de primera instancia frente a la reducción de la condena que, se itera, a juicio de esta Corporación se encuentra injustificada.

Finalmente, en este acápite se anotará que frente al alegato esgrimido por el curador *ad litem* de los herederos indeterminados del señor Fidencio Narváez sobre que debió estudiarse la responsabilidad del vehículo de servicio público contra el que colisionó el automotor en que se transportaba la señora Puerres Guerrero, pues tal aspecto nunca fue puesto en consideración del litigio, por lo que no se llamó al proceso a su conductor, dueño o empresa respectiva, por lo que no habrá lugar a su estudio. En adición, claramente se observa del video aportado, que ninguna injerencia tuvo el otro vehículo en la causación del accidente, tal como se colige de lo expuesto con antelación en este proveído.

2. Ahora bien, acreditada la responsabilidad civil corresponde determinar los montos susceptibles de ser indemnizados a favor de los demandantes por lucro cesante, daño moral y daño a la vida de relación, conforme se fijó en la sentencia de primer grado, todos los cuales fueron objeto de reparo dentro de la alzada. A saber:

2.1 Frente al lucro cesante la parte demandada elevó como reproche su indebida tasación, pues alegó que dentro del expediente no se demostró el monto que percibía la señora Rosa Fanny Puerres Guerrero como ingresos mensuales por su ejercicio profesional como contadora, por lo que a su juicio debía aplicarse la presunción desarrollada a nivel jurisprudencial del salario mínimo para su determinación.

Contrario a ello, conforme se arguyó en la sentencia recurrida, de las declaraciones rendidas en el expediente a cargo de la parte demandante ninguno de los deponentes señaló de forma concreta el monto de los ingresos de la fallecida Rosa Puerres, pues únicamente anotaron que conocían su actividad profesional sin dar más detalles al respecto. No obstante, desde el escrito de demanda la parte actora estimó que la occisa devengaba la suma de \$1.000.000 mensuales, siendo la base para el reclamo de este concepto, y dentro de la oportunidad procesal respectiva ninguno de los convocados al litigio, objetó tal valor o aportó prueba para controvertirlo.

Así las cosas, atendiendo lo preceptuado en el artículo 206 del Código General del Proceso, contrario a lo señalado por el recurrente, sí se cuenta con un medio de convicción que permita determinar el ingreso de la accionante, como es la estimación realizada en la demanda, que ante la ausencia de otros elementos suasorios que controviertan su contenido se considera como suficiente para el monto de la condena impuesta en tal sentido.

2.2 En lo que respecta al daño moral, la aseguradora llamada en garantía reprochó la excesiva tasación de los perjuicios hecha en primera instancia, atendiendo los parámetros jurisprudenciales aplicables.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia frente a la figura del *arbitrium iudicis*, ha señalado:

“la aplicación del principio arbitrium iudicis, en lo pertinente, es entendido no como una facultad arbitraria o inverosímil, sino como un poder racional y prudente, enlazado, claro está, con las reglas de la sana crítica, y con los criterios normativos o subreglas que ofrezca la jurisprudencia vigente, o los principios del derecho, en pos de mejores estándares probatorios de probabilidad lógica que avancen hacia la certidumbre, superando las ambivalencias y las dudas, extrayendo elementos de convicción de las pruebas existentes, a fin de hacer justicia, reparando integralmente a la víctima o causahabientes”⁷.

Bajo este entendido, no obstante la presunción de su causación, el deber de tasar esta modalidad de perjuicios no puede entenderse desprovista de cualquier tipo de razonabilidad con el caso en estudio, ni menos aún encontrarse disgregada de la afección concreta que conllevó el hecho dañoso.

Dentro del caso en estudio, frente a tasación realizada dentro de la sentencia apelada, como es 70 s.m.l.m.v. para el padre e hijo de la occisa y 25 s.m.l.m.v. de las hermanas de aquella, son montos que se ha avalado en casos análogos por la Corte Suprema de Justicia, tal como se determinó por ejemplo en la sentencia Sentencia SC5686-2018 de 19 de diciembre de 2018. (M.P. Margarita Cabello Blanco), en la que se fijó como techo para la condena de daño moral la suma de 87 s.m.l.m.v.

⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2107-2018 de 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona

De igual forma, es dable mantener las condenas impuestas pues de las pruebas recaudadas en el expediente y las presunciones frente a este concepto, se arroja que para Bernardo Segundo Puerres y David Andrés Ruano Puerres, como padre e hijo de la fallecida respectivamente, se causó un sufrimiento de tal magnitud ante la pérdida en circunstancias dramáticas, al interrumpirse de manera intempestiva la vida de su hija y madre, respectivamente, lo que conlleva a que se mantenga la condena impuesta en primera instancia, pues no hay elementos de juicio que desvirtúen la decisión de primera instancia, y que evidencien circunstancias que hagan pensar que el dolor emocional sufrido no alcanzó a ser de la magnitud que diera lugar a su tasación en su máximo reconocible.

También frente a Bertha Elizabeth Puerres Guerrero, Ana Patricia Puerres Guerrero y María Nohemi Puerres Guerrero, las hermanas de la víctima del siniestro, quienes guardando las proporciones de dolor y congoja, son acreedoras a un monto menor de la condena a favor de los primeros, pues la misma se estima adecuada dada la relación de cercanía con quien perdió la vida en el siniestro, pues tampoco se aportaron elementos de convicción que desvirtuaran la tasación realizada dentro de la sentencia apelada, por lo que se considera que su estimación es proporcional y razonable frente a sus beneficiarios, manteniéndose incólume tal arista dado que atendió las circunstancias particulares del caso sometido a consideración de este Tribunal.

2.3 En lo atinente al daño a la vida de relación, la parte demandada reprochó que se haya avalado la condena por este concepto pues estima que tales perjuicios no se demostraron dentro del expediente.

Frente al daño a la vida de relación, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que *“su naturaleza, diferente a la del daño moral, comporta una afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus actividades cotidianas; relaciones con sus más cercanos, amigos, compañeros, etc., a diferencia de los daños morales que implican una congoja; impactan, directamente, su estado anímico, espiritual y su estabilidad emocional”*⁸. (subrayado fuera del texto original)

Por lo anterior, de la revisión del plenario encuentra este Tribunal que le asiste razón a la parte demandada, respecto a que no existe medio de convicción que respalde

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC7824-2016 de 15 de junio de 2016. M.P. Margarita Cabello Blanco.

la ocurrencia de esta afección externa del extremo pasivo por el fallecimiento de la señora Rosa Fanny Puerres Guerrero, por el contrario, en las declaraciones de Robert de Jesús Beltrán, Liliana Patricia Caicedo Villota y Christian Felipe Jojoa Puerres se anotó que se desconocían las consecuencias que tuvo para la familia el fallecimiento de la víctima, más allá de la disminución de los ingresos de su núcleo familiar y el evidente dolor por su pérdida, por su parte Ruth Patricia Benitez Delgado señaló que supo que un sobrino de Rosa Puerres dejó de trabajar, sin embargo, atañe a alguien que no hace parte del litigio.

De igual forma, los informes de psiquiatría y psicología forense emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tampoco anotaron, posterior a la evaluación de los demandantes, alguna alteración exterior en las relaciones sociales, familiares, educativas o profesionales de alguno de ellos.

En este sentido, no se constata de los medios de convicción aportados y recaudados en el expediente que alguno arroje la afectación a la vida de relación de algunos de los actores o que desborde el daño moral ya reconocido previamente, por lo que corresponderá denegar su concesión.

5. Atendiendo los argumentos expuestos, esta Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia, frente a la condena impuesta por daño a la vida de relación, como también se adicionará frente a la negativa de las restantes pretensiones elevadas y confirmará en lo restante la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto la **SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA** del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto el 19 de agosto de 2020, corregida en proveído de 20 de agosto de la misma anualidad, dentro del proceso declarativo de la referencia, y en su lugar disponer:

“TERCERO.- Condenar a Wilmer Narváez Cundar, Brayan Narváez Cundar, Diana Narváez Cundar, y los herederos indeterminados del señor Fidencio Omero Narváez a pagar solidariamente, dentro de los CINCO DÍAS

siguientes a la ejecutoria de este fallo, el daño sufrido por los demandantes, a cuenta de los hechos a que se contrae esta providencia, por los montos y conceptos que se anuncian a continuación:

a) Por concepto de lucro cesante consolidado, la suma de \$127.745.328 en favor de David Andrés Ruano Puerres.

b) Por concepto de perjuicios morales, para David Andrés Ruano Puerres y Bernardo Segundo Puerres el monto de 70 smlmv para cada uno; para Bertha Elizabeth Puerres Guerrero, Ana Patricia Puerres Guerrero y María Nohemi Puerres Guerrero, el equivalente a 25 smlmv para cada una.

Vencido el plazo otorgado, las sumas objeto de la condena devengarán un interés legal civil moratorio equivalente al 6% anual, hasta cuando se materialice su pago.”.

SEGUNDO.- ADICIONAR un numeral a la sentencia apelada, así “*Denegar en lo demás las pretensiones de la demanda*”

TERCERO.- CONFIRMAR en lo restante el proveído recurrido.

CUARTO.- Sin lugar a condenar en costas de segunda instancia, ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación.

QUINTO.- DEVUÉLVASE el expediente junto con la actuación surtida en ésta Corporación, al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL - TRIBUNAL 004 SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA DE LA CIUDAD
DE PASTO-NARIÑO

GABRIEL GUILLERMO ORTIZ NARVAEZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL - TRIBUNAL 001 SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA DE LA CIUDAD
DE PASTO-NARIÑO

AIDA VICTORIA LOZANO RICO
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA DE LA CIUDAD DE PASTO-NARIÑO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8e97a76337ee6d475d038eded121ec57b1b635d95931325e0efd4ce7f33d1233**
Documento generado en 12/07/2021 04:05:07 PM